



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

**ESCUELA DE POSGRADO**

**PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN GESTIÓN  
PÚBLICA**

**Derecho de defensa y la vigencia del Código Procesal Penal en la  
Defensoría Pública del Distrito Judicial de Piura 2019**

**TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:  
MAESTRO EN GESTIÓN PÚBLICA**

**AUTOR**

Vilela Olivares Oscar Roberto (ORCID: 0000 – 0002 – 4660 – 1288)

**ASESOR**

Dr. Jurado Fernández Cristian Augusto (ORCID: 0000-0001-9464-8999)

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN**

Reforma y modernización del Estado

**PIURA – PERÚ**

2021

## **DEDICATORIA**

*A mi familia por todo el apoyo constante durante la realización del presente trabajo, sin ellos no hubiera terminar este trabajo.*

*Oscar Roberto*

## **AGRADECIMIENTO**

*A mi asesor de tesis por la ayuda constante y precisa en la formulación del presente trabajo y a todos los amigos que de diferente forma han coadyuvado a la realización del presente trabajo.*

*Oscar Roberto*

## ÍNDICE DE CONTENIDO

	Pág.
Dedicatoria	ii
Agradecimiento	iii
Índice de contenido	iv
Índice de tablas	v
Índice de figuras	vi
Resumen	vii
Abstract	viii
I. INTRODUCCIÓN	1
II. MARCO TEÓRICO	7
III. METODOLOGÍA	24
3.1. Tipo y diseño de investigación	24
3.2. Variables y operacionalización	24
3.3. Población muestra y muestreo	25
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	25
3.5. Procedimientos	27
3.6. Método de análisis de datos	27
3.7. Aspectos éticos	27
IV. RESULTADOS	28
V. DISCUSIÓN	34
VI. CONCLUSIONES	38
VII. RECOMENDACIONES	39
Referencias Bibliográficas	40
Anexos	50

## ÍNDICE DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1 Ficha Técnica sobre efectividad del derecho de defensa	25
Tabla 2 Baremo sobre el cuestionario de efectividad del derecho de defensa	26
Tabla 3 Confiabilidad Alfa Cronbach	26
Tabla 4 Niveles de la dimensión celeridad	28
Tabla 5 Niveles de la dimensión economía procesal	29
Tabla 6 Niveles de la dimensión publicidad	30
Tabla 7 Niveles de la dimensión Equidad	31
Tabla 8 Niveles de la dimensión Protocolo de tareas	32
Tabla 9 Distribución de niveles de la variable	33

## ÍNDICE DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1 Distribución de niveles de la dimensión celeridad	28
Figura 2 Distribución de niveles de la dimensión economía procesal	29
Figura 3 Niveles de la dimensión publicidad	30
Figura 4 Niveles de la dimensión equidad	31
Figura 5 Niveles de la dimensión protocolos de tareas	32
Figura 6 Distribución de niveles de variable	33

## **RESUMEN**

La presente investigación titulada “Derecho de defensa y la vigencia del Código Procesal Penal en la Defensoría Pública del Distrito Judicial de Piura 2019”; tiene como objetivo determinar el nivel de efectividad del derecho de defensa, para a partir de ello, poder plantear alternativas que permitan mejorar este servicio, siendo que esta investigación surge como respuesta a la realidad problemática del servicio de justicia, en el área penal, en las Defensorías Públicas.

Es ampliamente conocido que, el Estado emprendió una profunda reforma en la administración de Justicia con la dación del Código Procesal Penal del 2004, que trajo consigo -y en lo que respecta a nuestra investigación-, una reforma estructural en la calidad del servicio de la Defensoría Pública, habiéndose asignado recursos logísticos, humanos y procedimentales para que los defensores públicos -antes conocidos como defensores de oficio-, realicen una defensa de calidad en beneficio de la comunidad que recurre a esta institución pública.

Ahora bien, el estudio obedece a un tipo descriptivo y diseño descriptivo simple, y aplicó un cuestionario a una muestra comprendida a 180 operadores de justicia del Distrito Judicial de Piura (fiscales, jueces, policías y abogados particulares). Luego del análisis e interpretación de resultados, se llegó a la siguiente conclusión: se determinó un nivel medio de efectividad del derecho de defensa a través de la defensoría pública en el Distrito Judicial de Piura a partir de la vigencia del Código Procesal Penal, según la percepción de los operadores de justicia, existiendo un prevalente 60,6% en el nivel medio, producto de poco personal y especialización.

Palabras Claves: Efectividad del derecho de defensa, operadores de justicia, Código Procesal Penal.

## **ABSTRACT**

The present investigation titled "Right of defense and the validity of the Criminal Procedure Code in the Public Defender's Office of the Judicial District of Piura 2019"; aims to determine the level of effectiveness of the right of defense, to be able to propose alternatives that allow improving this service, since this investigation arises as a response to the problematic reality of the justice service, in the criminal area, in Public Defenders.

It is widely known that the State undertook a profound reform in the administration of Justice with the adoption of the Criminal Procedure Code of 2004, which brought with it -and with regard to our investigation-, a structural reform in the quality of the service of the Public Defender, having assigned logistical, human and procedural resources so that public defenders-formerly known as public defenders-, carry out a quality defense for the benefit of the community that resorts to this public institution.

However, the study obeys a descriptive type and simple descriptive design, and applied a questionnaire to a sample comprised of 180 justice operators from the Judicial District of Piura (prosecutors, judges, police officers and private lawyers). After analyzing and interpreting the results, the following conclusion was reached: an average level of effectiveness of the right of defense was determined through the public defender's office in the Piura Judicial District from the effective date of the Criminal Procedure Code, according to the perception of justice operators, with a prevailing 60.6% at the middle level, a product of few personnel and specialization.

**Keywords:** Effectiveness of the right of defense, justice operators, Criminal Procedure Code.



## **I. INTRODUCCIÓN**

Dentro de las reformas implementadas en América Latina y en especial en nuestro Estado; que se han configurado en razón a la administración de justicia; constituye la revalorización y fortalecimiento del servicio de defensa pública; el cual se desarrolla por medio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; anteriormente recibían la denominación de “defensores de oficio”; sobre estos cambios el Estado Peruano ha puesto especial énfasis en su desarrollo e implementación por medio del Código Procesal Penal promulgado en el año 2004; el cual ha sido puesto en marcha de manera específica en el Distrito Judicial de Piura; a partir del 1° de abril del 2009.

Es así que el Estado para mejorar el servicio de justicia en materia de defensa pública -tan criticado por diversos sectores de la sociedad, especialmente de la comunidad jurídica, dado que el servicio que se presentaba, era considerado de poca efectividad, por cuanto los defensores de oficio no estaban debidamente preparados para asumir un proceso penal, aunado al poco personal con que contaban (un defensor estaba asignado a dos salas penales) y el poco tiempo que le brindaba para asumir la defensa (muchas veces en forma inmediata al ser convocados y evitar frustrar audiencias), así como el escaso apoyo logístico que recibía de su institución para desplazarse a diligencias fuera del Juzgado o Fiscalía, sin dejar de señalar que no existían constantes capacitaciones para mejorar su rendimiento en su labor defensorial, en suma la cultura organización era deficiente, hecho que había sido puesto de manifiesto por la Defensoría del Pueblo; producto del diagnóstico realizado orientado a comprender la problemática de la justicia penal y la necesidad de poder implementar su reforma.

Esta condición fue motivo de que el Estado intervenga de manera directa a nivel de todas las instituciones vinculadas a los procesos y procedimientos descritos; con especial atención a los miembros de la Defensoría Pública; ya que son componentes claves para brindar un eficiente servicio de justicia a los usuarios, salvaguardando el derecho de los justiciables; tal como se encuentra establecido en nuestra Carta Magna; en el artículo 139°; inciso 16, el cual refiere el denominado principio de la gratuidad de la administración de justicia y de la defensa gratuita; dirigido a las personas de recursos económicos escasos.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por medio del plan local para poder desarrollar las reformas procesales penales en el Distrito Judicial de Piura; manifiesta que para poder alcanzar la eficiencia y eficacia en la gestión administrativa de la justicia penal; es sumamente importante el desarrollar una integral planificación; que atienda y solucione la problemática con una visión transversal y orientada en el cumplimiento estricto de los procesos; lo cual deberá ser abordado desde las instituciones operadoras del sistema de justicia: Ministerio Público; Poder Judicial; Defensa Pública y Policía Nacional del Perú.

La Dirección Distrital de defensa pública y acceso a la Justicia; en la región Piura posee una estructura orgánica y logística; posee infraestructura propia; y se encuentra debidamente sistematizada; empezando su accionar en abril del 2009; la responsabilidad de su funcionamiento recae en la figura de una jefatura; la cual en la práctica es semejante en funciones al presidente de la Junta de Fiscales del Distrito Fiscal de Piura; o al presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura. También se cuenta con área de Conciliación; la cual es la encargada de desarrollar los acuerdos que benefician a los querellantes en distintas materias de acuerdo a ley.

Así mismo se cuenta con una Unidad de Víctimas; quienes atienden los casos penales; en donde la prioridad es defender los derechos de las partes vulneradas; contando también con profesionales que dan respaldo al trabajo de los defensores públicos; tales como psicólogos; asistentes sociales y medicina legal. El personal que labora en el área de defensa pública son dieciséis profesionales; a quienes aleatoriamente se les asignan los casos; en función del requerimiento realizado por el Ministerio Público o Poder Judicial.

Tal como se ha diagnosticado debido a la restructuración significativa que se ha realizado en la Dirección Distrital de la Defensoría Pública de Piura y la vigencia el Código Procesal Penal en abril del 2009; existe una merma sentida en la labor de los defensores públicos. Lo cual se evidencia debido a la ausencia en los procesos judiciales, respondiendo que la falta la limitación de personal se encuentran atendiendo otros casos; o en su defecto que la comunicación no había llegado a tiempo; al no haber llegado la comunicación a tiempo manifiestan que

no se conoce el caso; por tanto, no se ha estudiado el procedimiento a desarrollar.

A todo lo anterior mencionado, estamos siendo testigos de la mala calidad del servicio de defensa pública; afectando de manera directa a los litigantes; cabe resaltar que el máximo organismo constitucional en el Perú y la Corte Interamericana de Derechos de Humanos; a nivel de Latinoamérica; enfatizan la relevancia de este servicio que está bajo la responsabilidad del Estado; en materia penal; dicho accionar debe de desarrollarse de forma efectiva.

Por ello el sistema no estará completo si a pesar de tener magistrados capacitados y que apliquen el derecho en la forma que corresponde; así como también el poder contar con la Policía Nacional del Perú – PNP y el Ministerio Público, quienes tienen por función perseguir e investigar los actos delictivos; se debe de contar con la contrapartida de la defensa pública; efectuando y atendiendo la defensa efectiva de los derechos de los procesados y víctimas; en la actualidad contamos con una clasificación de defensores para agraviados y para procesados; siendo esto una de las grandes reformas del Estado Peruano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDL y el Tribunal Constitucional; por medio del caso Expediente N° 02485-2018-PHC/TC; de fecha del 2020; enfatiza que el servicio de la defensa pública; no es simbólica o pasiva; ya que se debe priorizar un accionar eficaz al servicio de la justicia.

La administración de justicia penal, constituye un servicio muy importante para el Estado, por ello se debe de brindar a la ciudadanía, la responsabilidad que se requiere; debido a la importancia y trascendencia de los hechos; que deben de comprometer principios, derechos y bienes jurídicos; que ayudan a comprender la complejidad; debido a ello el Estado está en la obligación de asumir su prestación; por tanto, debe apelar a lo que la doctrina recomienda por ser una política pública, señalada de forma específica en nuestra Constitución Política (1993); contando además con elementos supranacionales y/o nacionales que demandan su exigencia, acorde a los estándares internacionales; tal como se precisa en el Pacto de San José de Costa Rica.

Bajo este contexto, en el país; el sistema judicial en materia criminal no sufría ninguna innovación desde el Código de 1920; lo cual ha servido para que bajo el contexto actual; se ponga de lado el modelo inquisitivo, cuyo procedimiento señalaba que el procesado y la víctima no tenían una efectiva defensa que haga valer sus derechos; ya que eran considerados como objetos y no como sujetos del proceso; contradiciendo su propia naturaleza; debido a ello los Estados tienen una doble responsabilidad: impartir justicia y generar la indefensión de los sujetos procesales; esta situación se mantuvo por casi cien años de vigencia del modelo inquisitivo; sumándose que el sistema de justicia era ineficiente.

El análisis realizado también fue objeto de estudio por medio de una comisión instaurada para tal efecto; cuyo objetivo además era otorgar los fundamentos para la transformación de un nuevo marco normativo; el cual se materializó en el Código Procesal Penal del 2004; dicho documento inicia el proceso de reforma; el resultado de la comisión determinó que el nivel de crisis de la prestación de justicia al servicio del Estado; señalaba una sobrecarga procesal desproporcional; así como también un alto nivel de corrupción; incremento de la criminalidad y por último que los sujetos procesales se encontraban en completo abandono en cuanto a la defensa de sus derechos; agregándose además que los procesos demoraban y se dilataban por años; generando insatisfacción e inconformidad en el servicio de justicia.

Burgos (2008); ha analizado el proceso de reforma procesal en nuestro país; señalando que el Código Procesal Penal; brinda una forma nueva de desarrollar la justicia penal, de forma más rápida fundada en el principio de la oralidad; el servicio de audiencias; con soluciones más inmediatas; haciendo uso de un lenguaje sencillo; buscando la objetividad de los magistrados; una justicia confiable y de calidad que tanto se exige y se necesita.

Rosas (2011); señala que el Código Penal actual brinda una participación mayor e incrementa el protagonismo del Ministerio Público, en la conducción de todos los procesos y procedimientos penales de investigación; así mismo brinda mayores facultades a los operadores de la justicia y a la Policía Nacional; en relación a la investigación preparatoria permite el desarrollo de diligencias preliminares y de las propiamente formalizadas; actuando con la fiscalía para poder esclarecer los

hechos manifestados; al lado de una defensa eficaz pro activa; por tanto resulta claro, que dentro de esta reforma, la defensa pública juega un papel fundamental como contraparte de la denominada tesis fiscal.

Por ello el problema de investigación se basa en la siguiente pregunta: ¿Cuál es el nivel de efectividad del derecho de defensa a través de la Defensoría Pública a partir de la vigencia del Código Procesal Penal 2019, según la percepción de los operadores de justicia? Así mismo se han formulado otras interrogantes complementarias: ¿cuál es el nivel de celeridad del derecho de defensa a través de la defensoría pública a partir de la vigencia del Código Procesal Penal 2019?; ¿cuál es el nivel de economía procesal del derecho de defensa a través de la defensoría pública a partir de la vigencia del Código Procesal Penal 2019?; ¿cuál es el nivel de publicidad del derecho de defensa a través de la defensoría pública a partir de la vigencia del Código Procesal Penal 2019?; ¿cuál es el nivel de equidad del derecho de defensa a través de la defensoría pública a partir de la vigencia del Código Procesal Penal 2019? Y por último ¿cuál es el nivel en el protocolo de tareas del derecho de defensa a través de la defensoría Pública a partir de la vigencia del Código Procesal Penal 2019?

La hipótesis de la investigación se expresa en por medio de la siguiente afirmación: el nivel de efectividad del derecho de defensa a través de la Defensoría Pública a partir de la vigencia del Código Procesal Penal 2019 según la percepción de los operadores de justicia sería de nivel medio.

Las razones que justifican el estudio desde una perspectiva teórica considero que la investigación permite el incremento de conocimientos teóricos científicos relacionadas a la variable efectividad del derecho de defensa, lo cual se justifica con la finalidad de mejorar y se fundamenta en los planteamientos teóricos de Sanmartín Castro (2017) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2018), que permite la descripción de la problemática en estudio.

Desde una perspectiva práctica el estudio desarrollado beneficia a la población del Distrito Judicial de Piura que están inmersos en el servicio público del derecho de defensa eficaz, así como también a los operadores de justicia y autoridades, que en función de los resultados obtenidos permitirá tomar decisiones para

enfrentar la problemática. Desde una visión metodológica la investigación responde al enfoque cuantitativo y, por tanto, se aplicó un instrumento de recojo de datos que fue validado por metodólogos, realizándose un análisis estadístico; asimismo, podrá utilizarse en alguna investigación relacionada con la variable.

El objetivo general del estudio es poder establecer el nivel de efectividad del derecho de defensa a través de la defensoría pública en el Distrito Judicial de Piura a partir de la vigencia del Código Procesal Penal 2019, para brindar alternativas de solución que mejoren este servicio. Los objetivos específicos consideran el determinar el nivel de celeridad del derecho de defensa a través de la defensoría pública en el Distrito Judicial de Piura a partir de la vigencia del Código Procesal Penal, así como también identificar el nivel de economía procesal del derecho de defensa a través de la defensoría pública en el Distrito Judicial de Piura a partir de la vigencia del Código Procesal Penal, describir el nivel de publicidad del derecho de defensa a través de la defensoría pública en el Distrito Judicial de Piura a partir de la vigencia del Código Procesal Penal, analizar el nivel de equidad del derecho de defensa a través de la defensoría pública en el Distrito Judicial de Piura a partir de la vigencia del Código Procesal Penal; y por último evaluar el nivel en el protocolo de tareas del derecho de defensa a través de la defensoría pública en el Distrito Judicial de Piura a partir de la vigencia del Código Procesal Penal.

## **II. MARCO TEÓRICO**

Asencio (2016); analiza el alcance del derecho de defensa y su relevancia en los procesos penales; resultando que existe una gran carga procesal; situación que genera una gran congestión en el servicio de justicia; afectando la labor de jueces y fiscales; y también ocasionando impunidad en algunos actos delictivos que se han investigado de forma superficial y parcial; estas condiciones impiden poder lograr la verdad procesal; quedándose muchas investigaciones penales en investigaciones previas; resultando que el derecho de defensa es esencial para poder avalar el desarrollo de los procesos y procedimientos justos.

Sanmartín (2017); analiza el proceso penal acusatorio moderno y los principios procesales; así mismo en el escrito menciona que la Constitución Política del Perú; se encuentra la base fundamental de estos cambios; sustentándose en dos razones esenciales; la primera está sustentada en que la Carta Magna, presenta una posesión de supremacía; tal como se especifica en el artículo 138°; en su segundo párrafo; y la segunda razón señala que los derechos en conflicto presentan importancia constitucional, ya que se menciona el derecho de persecución del delito, mencionado también en la Constitución en el contenido de mismo artículo; concluyendo que los procedimientos penales se encuentran definidos en base a lineamientos fundamentales; en donde el derecho procesal penal se encuentra enmarcado constitucionalmente y los derechos que se mencionan son de pleno cumplimiento para todos.

Núñez y Carrasco (2015) desarrollaron un estudio referente al análisis económico de la administración de justicia penal; de forma específica en el derecho de defensa; planteándose el interrogante si ¿la justicia es un bien público o privado; el estudio tuvo la participación de 124 sujetos; concluyendo que los servicios de justicia que son ofertados y desarrollados por los magistrados del poder judicial chileno; no deben de consignarse como bienes públicos; sino que deben de ser considerados como privados esencialmente; ya que de esta forma sus alcances tendrían una mayor significatividad en las soluciones que se aplican al sector público.

Roxin, (2009); público un ensayo referente a la defensa desarrollada en el proceso penal del estado de derecho; en la cual manifiesta que el derecho de defensa es un derecho innegable del imputado; por tanto, la asignación de un defensor público es de responsabilidad del Estado; sin embargo, la población respecto al defensor público es muchas veces tratado con desconfianza e incompreensión; son percibidos como asistentes de los autores penales. El autor señala que esta situación es polémica ya que el respeto y tolerancia de este derecho; demanda la implicancia de que todo imputado debe de tener un abogado defensor; así mismo responsabiliza al Estado de poder proporcionarle tal elemento; en caso no pueda contar con uno, por no tener los medios económicos para poder tenerlo.

Portillo (2017); estudia las dificultades de ejecución del Nuevo Código Procesal Penal; en el cual resalta las dificultades de los operadores del derecho; en el desarrollo de los procedimientos y procesos penales; concluye que el NCPP presenta una gran dificultad debido a que no se cuenta con los recursos necesarios para su aplicación en el distrito judicial de Puno; es más es necesario que los involucrados en el sistema de justicia presenten un mayor conocimiento de los cambios e innovaciones que requiere la aplicabilidad del nuevo código.

Dávila (2015); en su estudio analizo la aplicación del NCPP y las acciones desarrolladas por el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, con respecto a las investigaciones de delitos efectuados en Lima metropolitana 2014 – 2015; en la cual concluye que la aplicabilidad del NCPP, genera un efecto positivo en las instituciones encargadas de la investigación del delito; lo cual al evaluar los resultados se presentan reportes que marcan una gestión en positivo.

Chávez (2015), también analiza el tema, orientando sus estudios en la delimitación de las funciones entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú a la luz del NCPP; el autor concluye que las funciones de ambos entes que intervienen en los procesos y procedimientos de acción penal; es un rasgo fundamental del sistema judicial; sin embargo, cabe destacar que el Ministerio Público es el principal elemento del desarrollo de la acción penal; por ello se necesita que todos sus componentes tengan muy en claro las funciones que son precisadas en el Código.



Quico (2015); analizo también la importancia del Ministerio Público a nivel constitucional enfatizando la investigación preparatoria en el NCPP; en el distrito judicial de Puno durante los años 2011 – 2012; concluyendo que existen diversos factores de naturaleza jurídica, material, humana e histórica que afectan la conducción y gestión del Ministerio Público; lo cual distorsiona su esencia constitucional de combatir el delito; los encuestados en el estudio señalan en un 60% que los fiscales no cumplen con sus funciones asignadas y que mayormente cumplen su rol de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 052

Castillo y Suárez (2014), analizan también el derecho de la defensa a la luz del NCPP; en el distrito judicial de Barranca; concluyendo que no existen uniformidad de ideas entre quienes representan al Ministerio Público; ya que el desarrollo de las diligencias no son ejecutadas bajo un mismo patrón con especial atención al defensor público; debe de promoverse la aplicabilidad de la normativa vigente; lo cual implica su regulación; por tanto es necesario estar más de cerca con los procedimientos desarrollados, para que estos se ejecuten bajo los mismos parámetros.

La administración de justicia penal se define en términos de Benavides (2017), como la acción que esta orientada en poder avalar el bien jurídico protegido por el derecho penal; el cual por medio de la vía de la denominada norma sustantiva representa aquellos comportamientos o conductas que se consideran dañosas a dichos bienes; y que, por vía de norma adjetiva, marca los causes para poder procesar dichas conductas. Por tal razón el legislador debe de priorizar el poder señalar los procedimientos expeditos legales; debido a que los operadores de justicia deben de poder establecer los lineamientos bajos los cuales se debe de enfrentar las querellas que se presentan entre el victimario y la víctima; en la cual se debe de priorizar el objeto de la protección.

La Organización de las Naciones Unidas – ONU (2017) señala que la administración de Lajusticia debe de desarrollarse de forma imparcial y debe de estar exenta de discriminación. Por otra parte, el sistema judicial también debe de estar dotado de las características antes señaladas; esto constituye un requisito esencial para el respaldo del Estado de Derecho; esta condición se alcanza con una administración de justicia sin discriminación.

Ramírez (2010), considera administrar la justicia es una responsabilidad básica del Estado y a la vez es esencial para poder mantener la convivencia entre los distintos miembros de la sociedad; la justicia es considerada como un servicio público basada en el principio fundamental de la equidad, así como la educación y la salud; sin embargo cabe resaltar que la justicia no es percibida de forma positiva; ya que cuando se administra también suele generar insatisfacción o disconformidad entre los distintos miembros de la sociedad.

Maier (2001), considera que la defensa eficaz que debe de desarrollarse frente al servicio de una justicia eficiente; en Latinoamérica requiere de una urgente reforma que modifique su estructura y sus bases, con la finalidad de que la ciudadanía en general pueda optar por resolver sus conflictos jurídicos; sin la necesidad de tener que esperar mucho tiempo; lo que se debe de priorizar es la solución justa; bajo este sentido se deberá reestructurar los roles y funciones de quienes intervienen en los procedimientos procesales; así como también deberá de potenciarse el resguardo y cumplimiento de los derechos fundamentales; entre ellos el derecho de defensa como protección necesaria y obligatoria para el imputado, en respuesta a las facultades restrictivas del ente acusador.

Silvestroni. (2011), considera que el derecho de defensa, ha generado cierto rechazo dentro de la sociedad; y en algunos hasta antipatía; ya que las personas que delinquen de por si tienen el rechazo de la sociedad, por los hechos o situaciones que les son atribuidos a los presuntos delincuentes. Debido a este razonamiento la presunción de inocencia, es entendida como un obstáculo en el procedimiento penal; ya que su objetivo es hacer frente al prejuicio social de culpabilidad.

El derecho de defensa es parte esencial del denominado debido proceso; lo cual debe ser comprendido como un aval genérico de todo sujeto imputado en un proceso penal; y que dicho procedimiento se encuentra señalado en nuestra Constitución Política de 1993; la cual a su vez se sustenta en las normativas internacionales sobre la protección de los derechos fundamentales. Por ello el artículo octavo de la Convención Americana de Derechos Humanos – CADH; señala de forma detallada el derecho en mención; lo cual señala que la persona imputada en un proceso penal; debe de resguardarse el principio fundamental del

debido proceso; por tanto, se especifica también que toda persona, sin distinción alguna tiene derecho a ser escuchada; con la debida garantía y dentro del plazo previsto establecido por el magistrado o tribunal; el cual deberá actuar de forma imparcial, objetiva, independiente y competente; conforme se encuentra señalado en la ley. Así mismo el sujeto inculcado tiene derecho al principio de presunción de inocencia; mientras no se compruebe lo contrario.

Larsen (2016) señala que para poder aplicar el derecho de defensa se deben de cumplir algunas garantías mínimas; por ejemplo, la equidad; el debido trato; si el inculcado tiene otra lengua, debe de asistirle un traductor; así mismo el presunto inculcado debe de conocer en detalle la acusación que se le formula; debe de dársele a conocer el detalle del tiempo para que organice y planifique su defensa; dotándosele de los medios para tal fin; así mismo se tiene la responsabilidad de encontrar a los testigos y peritos para que participen del proceso; ya que son los sujetos que aportaran luz al desarrollo de los hechos. Así mismo debe de resguardar el hecho de que nadie puede ser forzado a declarar contra uno mismo; no tampoco señalarse como culpable.

Binder (2013), señala que el denominado debido proceso y las garantías mínimas; otorgan el contenido que requieren un cuidado significativo que implica una garantía mayor; en el cual el derecho de defensa del imputado en la figura del abogado defensor constituye un elemento importante para la construcción de la equidad a nivel de la justicia. Bajo este sentido se declara que para poder desarrollar el derecho de defensa real; el sujeto imputado en el proceso penal; únicamente podría defenderse de cuenta propia excepcionalmente, si esta plenamente consciente de los actos y procedimientos a desarrollar y además cuenta con la debida formación técnica que asegure una comprensión de la situación en la cual se encuentra.

Por ello el concepto de inviolabilidad de la defensa, no está únicamente asociado al imputado; sino que también se constituye en una legitimidad de exigencia para el Estado de Derecho. Por ello en un proceso legítimo penal la figura del imputado debe de tener la suficiente oportunidad de defensa; sin embargo, para poder desarrollar una perspectiva adecuada de la situación debemos de acudir al CADH; es así que en su artículo octavo señala que al inculcado le asiste el

derecho a defenderse de forma personal o ser asistido por un defensor, el cual podrá ser de su libre elección; así mismo tiene el derecho de comunicarse de forma privada y libre. En caso el inculpado no pueda asumir el costo de un defensor el Estado le asignará uno; esto sucederá si el inculpado no presenta defensor dentro del tiempo establecido.

Díaz (2015) considera que el sistema procesal penal; ha sufrido una transformación importante por la entrada en vigencia del NCPP; lo innovador es que está orientado esencialmente desde una perspectiva alineada al principio acusatorio; el mismo que se visualiza en el desarrollo de los procedimientos penales que implican la fase de investigación preparatoria; asociada a la flexibilización, la racionalización y la eficacia; en la etapa intermedia está orientada en la calificación de la primera etapa; y por último el desarrollo del juicio del proceso.

Ascencio (2016), considera que el principio acusatorio puede catalogarse como formal o mixto; el formal comunica el desarrollo del proceso penal, desde una perspectiva de solución histórica relacionada entre el acusatorio y el inquisitivo; esta situación describe al sistema procesal penal como un procedimiento de partes; otorgándole garantías; por ello el proceso de mayor importancia del proceso penal es el desarrollo del juicio oral; en donde el Ministerio Público deberá demostrar los elementos incriminatorios.

Sánchez (2005); considera que la etapa de juicio oral es la parte de mayor importancia en el proceso penal; en esta fase las estrategias que han desarrollado las partes serán comparadas, confirmadas y confrontadas; por medio de los actos probatorios, los cuales se llevarán a cabo durante la audiencia; desarrollándose las declaraciones de las personas (testigos, peritos, víctima y acusado); así mismo se deberá presentar los documentos y el material impreso; mostrándose también las pruebas. Finalmente, el magistrado cederá a las partes el desarrollo del proceso, en base a la evidencia de las pruebas que se presentan y a las estrategias que se desarrollan en la fase de la litigación oral defendiendo el caso y contraatacando al oponente.

Sanmartín (1986) señala que la actividad probatoria no es una actividad dejada a la casualidad muy por el contrario se sustenta en la racionalidad, la cual debe de desarrollarse de forma prudente; es por ello que el litigante debe de haber planificado una estrategia procesal, basándose en las herramientas de litigación oral que el sistema normativo establece. Por ello la cuestión probatoria o prueba constituye el conocimiento que debe de tenerse respecto al proceso y esta en referencia a la veracidad de las premisas sobre la relación procesal; la cual se vincula a los distintos sistemas procesales; siendo el responsable el juzgador.

Tal como se ha analizado existen dos figuras del sistema procesal; la que adopta un corte inquisitivo, en donde el magistrado no requiere de las partes que soliciten determinar los medios probatorios; bajo esta perspectiva el fiscal es el que apertura la instrucción; sin embargo, una vez aperturada la investigación el magistrado será el dueño de dicha investigación y dispondrá las medidas y pruebas que estime útiles y necesarias para poder resolver el caso.

El sistema acusatorio se encuentra descrito en el NCPP; bajo esta perspectiva son las partes quienes deberán de ofrecer las pruebas; tal como se establece en el artículo 155°; inciso tercero en el cual se precisa que en el juicio oral el magistrado deberá decretar las pruebas de oficio. Cafferatta (1988) señala que la razón del procedimiento penal es la búsqueda de la verdad histórica o real. La verdad real es definida como la contraposición al concepto de verdad formal; que a su vez es propia del proceso del derecho privado; en donde la razón del litigio esta dado por lo que las partes que disputan la razón de la acción de delito cometido.

Vivas (1999); señala que la Constitución establece los términos de verificación sobre la imputación; con lo cual se destruirá el estado del principio jurídico de inocencia; y no la verdad real en el sentido inquisitivo. Bovino (2000) manifiesta que la verdad es que debe de demostrarse un procedimiento del derecho privado; lo cual es una condición que debe de comprobarse bajo el desarrollo del procedimiento penal; exceptuándose la carga de la prueba y el estándar probatorio. Por ello las partes acuden al procedimiento del derecho privado para trabar la litis, determinando así el objeto de la discusión probatoria sobre el procedimiento penal.

Por todo lo señalado se puede precisar que la verdad que se busca demostrar por medio de las pruebas que están destinadas a poder verificar las acusaciones vertidas en el desarrollo del juicio; y no como lineamiento que guía el desarrollo de la investigación y los procedimientos que buscan la verdad histórica o material. En consecuencia, el desarrollo del proceso sólo implica analizar las afirmaciones vertidas que son sostenidas por las partes, que de por si no son suficientes para poder establecer y determinar una sentencia

La importancia del derecho radica en poder contar con una defensa penal eficiente y eficaz; así como la manifestación que esta en manos del abogado defensor, el cual materializa la estrategia de defensa, lo cual demuestra las garantías que respaldan el debido proceso del imputado. Roxin (2012), considera que el imputado tiene el derecho de defensa y que nadie puede negar este derecho, a pesar que la situación pueda generar desconfianza o incompreensión. Bajo esta perspectiva los defensores son tratados con menosprecio por parte de la sociedad, ya que son considerados coautores del delito.

Bajo este contexto se afirma que, para poder asegurar el derecho de defensa real, le sujeto imputado en un proceso penal; únicamente de forma excepcional podrá asumir su defensa por cuenta propia; cuando posea la condición técnica de formación en derecho; lo cual podrá garantizar que exista respeto a todas las garantías y derechos. Bajo esta situación el rol del abogado defensor debe de representar al imputado en el proceso pena, por ello el derecho a la defensa eficaz condiciona la participación de un abogado que garantice el desarrollo del proceso y que obedezca a la necesidad de los intereses los cuales deberán encontrarse debidamente representados.

Desde la perspectiva internacional la defensa pública se encuentra en concordancia a los principios que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH; por tanto, el derecho se encuentra plenamente reconocido y además de ellos se ha realizado difusión del contenido de sus criterios, que sustentan la argumentación jurídica de los operadores del derecho; por medio de los cuales se analiza la utilidad de estos hechos para desarrollar el derecho de defensa de forma eficaz. El CIHD (2015) analizo un caso; en cual determino que la república de El Salvador; cometió en falta de responsabilidad por no haber

garantizado el derecho de defensa penal en el caso de “Ruano Torres y otros”; en ello se evidencio que la defensa pública del Estado en mención fue ineficaz debido a que no se solicitó la nulidad de un reconocimiento a pesar de que el caso presentaba irregularidades; y que no se presentó ningún recurso contra la sentencia condenatoria; a pesar de las dudas existentes. Por ello el CIDH sanciona tales omisiones que atentaban contra los derechos e intereses de los involucrados.

Bajo este contexto el derecho de defensa desarrollado de manera eficaz implica que el debido proceso penal debe de establecer la presencia del defensor público o abogado defensor; que avalara el respeto a los derechos de la persona imputada; con ello se asegura el hecho de que los intereses del presunto infractor se encuentren debidamente representados. Esta exigencia de brindarle medios de defensa al imputado; implica que el Estado se vea limitado en no poder desarrollar acciones que vulneren los derechos de la ciudadanía; y que de no llevarse a acabo podría ser una posibilidad de abuso; por tanto, se debe de brindar equidad y un proceso transparente en beneficio de todos los involucrados.

Para poder desarrollar de forma eficaz la reforma de un proceso penal; es necesario poder reforzar los derechos fundamentales del procesado y esto desde de desarrollarse en el proceso penal; esta es una característica que se viene ejecutando en Latinoamérica; y que se evidencia en concordancia a las exigencias de la sociedad debido a las diferentes condiciones políticas, sociales, culturales y sobre todo económicas; esta condición nos muestra la gran tarea que se debe de ejecutar en relación a la búsqueda de la homogeneidad y equidad.

Bajo esta perspectiva es posible el poder discutir los múltiples problemas que son comunes a la región continental; lo que se debe de buscar es no cometer los mismos errores; ya que lo que se busca es romper la continuidad; buscando el desarrollo del contexto político y social que debe de estar en beneficio de todos. Por ello esta medida reviste gran importancia en el desarrollo de los certámenes académicos internacionales; entre los más usados los foros, los paneles entre otros.

Conocemos que los foros de discusión académica contribuyen al proceso académico formativo de los jóvenes en la actualidad, por ello la tarea de difundir y consolidar estos cambios en el ámbito normativo implica desarrollar áreas de gestión, capacitación y evaluación en beneficio de los operadores y los nuevos capacitadores.

Vargas (2006) considera que los proyectos evaluativos y de seguimiento de reforma, como los ya mencionados foros de debate y el respaldo a las innovaciones son asistidos por el Centro de Estudio de Justicia de las Américas – CEJA; el cual es un organismo independiente y autónomo del sistema jurídico interamericano; su sede se encuentra en la república de Chile. La reforma a desarrollar implica varios aspectos; el primero está asociada a la implementación y el diseño; debido a que en proyectos anteriores discurrían que era suficiente el asesoramiento de especialistas jurídicos o la intervención de los mismos; sin embargo, hoy podemos afirmar que estos cambios o innovaciones no sólo implican acciones legislativas; sino que van más allá de dicha normatividad; implica la participación de especialistas en las diferentes áreas para poder lograr el cambio que se requiere.

Por otra parte, se considera que una reforma integral demanda mucho más que el conocimiento de los operadores del derecho; los cuales no sólo tendrán que hacer frente a las innovaciones normativas; ya que tendrán que tener presente que toda reforma jurídica implica una modificación progresiva del desarrollo de las practicas antiguas y aceptación de las nuevas competencias. Hay que tener en cuenta que el convencimiento de incorporar nuevas tecnologías no basta; teniendo en cuenta que el mejoramiento del sistema de justicia no radica en el aumento de mayor personal o únicamente por el incremento presupuestal; se tiene que tener en cuenta la problemática e identificar los aspectos operativos que deben de mejorar.

Un segundo aspecto en mención es que debe de procurarse una mayor coherencia intrasistemática; a diferencia de los procedimientos anteriores que busca la reforma de manera integral vinculando el aparato de la justicia penal con las demás instituciones a las que se encuentra vinculada; con la finalidad de poder atender las exigencias normativas del entorno actual. Por ejemplo, existe la necesidad de poder concertar las normas del NCPP; con los preceptos asociados



al derecho sustantivo penal; así como también la adecuación del derecho constitucional al derecho administrativo; bajo esta perspectiva se procura equilibrar la nueva normativa con los nuevos procedimientos que tienen que desarrollar los magistrados, aparato fiscal y la Policía Nacional del Perú.

Bajo esta nueva perspectiva el rol principal está asociada al legislador; quien es el garante del cumplimiento del nuevo diseño política criminal; el cual debe de asegurar la compatibilidad entre los nuevos elementos participantes que el reformado proceso penal establece; así como también el texto normativo; tomando las pautas que la Carta Magna ha precisado y los reglamentos que de ellas se desprenden. Bajo este sentido la reforma penal esta incluida en la agenda política de varios países en Latinoamérica; ya que reformar el sistema judicial implica mayores exigencias al Estado de derecho y las exigencias de una sociedad ávida de justicia; sin embargo, no esta demás acotar que todos estos cambios necesitan la inversión necesaria para poder alcanzar los objetivos trazados.

Se hace necesario el compromiso de las autoridades y los gobernantes; ya que en base a su decisión de gestión y la implementación de los diseños se podrá alcanzar la tan ansiada reforma. Colombia y Chile por ejemplo han avanzados en los procedimientos y pautas de la reforma; sus avances sirven de referencia para otros Estados de la región. Sin embargo, en otros Estados; los avances se han limitado únicamente al aspecto normativo o a la puesta en vigencia del NCPP; dejando de lado la implementación que debe de ir a la par; hay que tener en cuenta que también se tienen que construir consensos para que los cambios se desarrollen en un mayor acuerdo.

Duce y Riego (2000) manifiestan que estos cambios de reforma procesal penal, transitan del modelo inquisitivo, al modelo acusatorio; dichos cambios presentan muchos obstáculos que debe de poder superarse. Bajo esta perspectiva la transformación cultural y normativa tiene por objetivo reforzar los componentes acusatorios del modelo; así como también instaurar sus procedimientos propios; los cuales deberán desarrollarse entre la parte acusadora y la parte que desarrolla la defensa; quienes con sus argumentos trataran de convencer al magistrado de la versión de lo que ha ocurrido.

En los argumentos que buscan el cambio de modelo existen razones en términos excluyentes o binarios que ubican al paradigma acusatorio e inquisitivo como contrapuesto para implementar y resolver los conflictos penales. Este procedimiento es favorable desde una perspectiva pedagógica para poder conducir a establecer generalizaciones. Además, no se debe de perder de vista que cada modelo posee su propia configuración; y sobre ello existe la tradición jurídica; que además debe de responder a fines culturales e ideológicamente diferentes; cabe resaltar que no existen modelos puros.

Bovino (2001) considera que muchas instituciones que sustentan en el modelo acusatorio; aún poseen raíces inquisitivas incluso comparten ambos modelos; lo cual no se puede dejar de lado aún; sin embargo, de acuerdo a la identificación del nuevo modelo procesal se permite marcar el rubro y así poder extraer las nuevas interpretaciones que pueden impulsar el cambio en el sistema vigente. Es necesario distinguir el modelo acusatorio del modelo adversativo; ya que la primera potencia una reforma fundamentada en el sistema jurídico romano germánico; y el otro tiene fundamento en el sistema anglosajón.

Montealegre (2005) señala que el nuevo modelo enfatiza el deslinde entre las funciones acusatorias y la sanción; esta última es propia del sistema acusatorio; sin embargo, también incorpora componentes contradictorios; los cuales son: elaboración de la teoría del caso; distribución de la carga de la prueba entre ambas partes: desarrollo de alegatos de apertura y cierre; etc. Con relación a la prueba, lo contradictorio hace suponer que el desarrollo de la actividad probatoria recae esencialmente en las partes; bajo esta perspectiva el magistrado interviene de forma subsidiaria. Como correlato existe una clara diferencia de los roles: la actividad acusatoria que es propuesta por una persona diferente del magistrado; así como también la defensa que debe de desarrollarse con equidad para ambas partes; y por último la decisión final que será asumida por el órgano imparcial e independiente.

Para poder realizar un reconocimiento de todas las dimensiones que supone el desarrollo de este proceso, se debe de tener muy en cuenta los distintos patrones culturales; los cuales también sufren transformaciones. El primero de ellos está asociado al enfoque del principio de legalidad procesal ; lo cual implica que todas

las investigaciones se desarrollan de forma obligatoria; esto no debe de suponer el derroche de recursos, no la saturación del sistema judicial en respuesta al conflicto penal; lo que se debe de priorizar es la discrecionalidad, lo cual implica el ejercicio de la acción penal y diferentes formas de persecución del delito que aseguren el desarrollo de la acción penal, favoreciendo los acuerdos entre el acusado y el Estado, lo cual debe de priorizarse como una política pública plenamente delimitada y defendida; bajo este nuevo tratamiento lo que se busca es la reducción de la carga procesal.

Por otra parte, un segundo patrón a desarrollar es el cambio de modelo de tratamiento entre el magistrado y las partes; siendo la parte preponderante el órgano judicial; bajo este nuevo enfoque la participación activa de las partes es esencial, las cuales estarán dotadas de amplias facultades para el ejercicio de la acción penal; en incluso sobre los temas que serán objeto de la prueba: Debemos entender que no se trata de la privatización de un conflicto penal; el protagonismo del magistrado es esencial y tiene control sobre la legalidad de los acuerdos formulados entre las partes; teniendo muy en claro que esta impedido de decidir por ellas.

Con referencia a la reforma procesal del Estado Peruano; para su mejor comprensión es necesario recurrir a la historia; sobre ello San Martín (2003); manifiesta que habiendo consultado la literatura especializada y teniendo como punto de partida el NCPP; el devenir histórico del proceso penal ha transcurrido por tres normativas: Código de Enjuiciamiento en materia Penal; el cual data de 1863; el Código de Procedimiento en Materia Criminal, de fecha de 1920; y por último el Código de Procedimientos Penales, de fecha 1940.

El Decreto Legislativo N° 638; puso en práctica el denominado Código Procesal Penal (1991); del cual únicamente entro en vigencia la parte capitular sobre la utilización del principio de oportunidad; la comparecencia; la detención judicial; la libertad provisional y por ultimo las diligencias especiales. La vigencia de este código fue ejecutada hasta 1994; lo cual dio paso a la creación de un Comité Especial para la evaluación de un nuevo Código; lo cual implico poder subsanar las observaciones realizadas por el poder ejecutivo y del poder judicial.

Los objetivos que pretende alcanzar el NCPP implican una clara diferenciación de las funciones de investigación que deben de desarrollar los fiscales y la fuerza policial; así como también los magistrados; por otra parte, la realidad debe conectar los principios de igualdad o contradicción con relación a las armas de los agentes responsables de la persecución penal a cargo del Ministerio Público y también de los defensores. Otra de las características de este NCPP es la excepcionalidad de la prisión preventiva; que contempla la libertad del imputado como regla del proceso; la misma que deberá ajustarse a los lineamientos específicos para tal fin. Del mismo modo la garantía de la oralidad es la esencia del proceso penal; sin embargo, su implementación buscara extenderlo para el nuevo procedimiento penal.

Por último, el desarrollo del proceso penal presenta tres etapas: la investigación preparatoria a cargo del fiscal, el cual tiene por objetivo recabar los elementos probatorios que van a permitir elaborar la acusación; y bajo la cual el imputado podrá preparar su defensa, teniendo como base la observancia de los derechos fundamentales; esta etapa la controla el juez de investigación preparatoria. La segunda etapa recibe la denominación de fase intermedia; la cual esta a cargo del juez de investigación preparatoria; quien controla las demandas de los fiscales de acusación o de cualquiera de las partes en conflicto. Por último, la tercera fase en la cual se desarrolla el juzgamiento; esta fase esta a cargo del juez penal unipersonal o del juzgado colegiado que estará integrado por tres jueces; cuya finalidad es analizar, evaluar y dictaminar el caso respecto a la acusación formulada.

Hay que tener en claro que debe de existir reconocimiento de garantía del derecho de defensa; lo cual constituye un requisito valido en el proceso penal, esta situación es una expresión importante constitucionalmente; ya que la doctrina registra que los derechos fundamentales poseen una doble figura: como garantías del derecho objetivo y como derechos subjetivos de la persona. Bajo este enfoque, el Estado tiene la exigencia de reconocer la defensa como un proceso de garantía; lo cual procurara ser real y efectiva en el desarrollo del proceso.

Carocca (1998) señala que es garantía el poder reconocer los procedimientos de defensa procesal; lo cual es una exigencia del proceso mismo; y a la vez un

requisito para su existencia; el autor también manifiesta que su resultado constituye un factor muy importante para su construcción; hay que tener en cuenta que la violación de la garantía de defensa constituye un proceso que perturba su validez. San Martín (2003) considera que siempre la defensa es necesaria, ya que reviste de validez todo proceso; así mismo enfatiza que la garantía de la defensa es una condición de carácter indispensable para que el proceso judicial sea desarrollado dentro del determinado debido proceso.

Binder (1993), señala que el derecho a la defensa, constituye una función especial del proceso penal; ya que actúa de manera conjunta con las garantías procesales, por ello la garantía de defensa no se ubica en un mismo plano como las demás garantías procesales. Hay que tener presente que el derecho a la defensa se origina en el hecho cuando la persona incurre en la comisión de un delito; lo cual incluso puede derivarse antes de la formulación de imputación criminal formal en el desarrollo del proceso penal; por ello reviste vigencia en el desarrollo del procedimiento preliminar. Sánchez (2004) considera que el derecho de defensa, debe de ser asistido por un abogado; durante el desarrollo de todo el proceso penal; incluso con anterioridad a la investigación policial o inicial.

Montero (1995) declara que el derecho a la defensa debe de ser avalado, desde el momento que se configura la imputación contra un sujeto en particular, esta situación se deberá especificar en el proceso por medio de la acusación formal; lo cual se desarrollará de forma normal en la fase de las actuaciones y que además se ratificará en la fase avanzada de las actuaciones; teniendo muy en claro que esta configuración se aplica a cualquier forma de imputación.

Moreno (1999) expresa que el derecho de defensa es fundamental y es consecuencia del reconocimiento constitucional; constituye la garantía de la persona, desde el momento que surge la imputación criminal; esto es parte del procedimiento preliminar que debe de desarrollarse. Ramos (1993) considera que a toda persona le asiste el derecho de defensa, lo cual le asistirá en la persecución de la actividad lícita que actuó.

Por lo expresado en líneas anteriores el derecho de defensa esta excepto de limitaciones; sin embargo, en la práctica se pretende limitar su acción temporal;

argumentando que la defensa únicamente es necesaria bajo la existencia de una imputación formal; lo cual constituye una errónea calificación; ya que el principio y derecho de defensa se origina iniciando la imputación del delito, por más difusa o no formal que esta sea.

La defensa debe ser unitaria y continua; lo cual implica que no existe ninguna etapa de del proceso penal; en el cual no se garantice el derecho de defensa; por ello el procedimiento preliminar debe de ser comunicado a las partes del proceso; informando que en el juicio oral tendrá la oportunidad de demostrar su inocencia; sin embargo, no se asegura que el imputado podrá defenderse. Cafferata (2000) señala que el derecho a la defensa es reconocido desde el primer instante de la pretensión penal. Gimeno (2005) argumenta que el derecho de defensa se origina con la imputación.

Hay que tener en claro que el val del derecho de defensa procesal muestra una semblanza positiva, pero también negativa. En lo positivo ejercer el derecho de defensa otorga a la persona la garantía de poder tener la posibilidad de participar en todos los procesos que se vinculen a sus intereses; bajo tal aspecto el derecho de defensa es un aval para la persona que puede modificar el proceso. Así mismo la defensa asegurara que las partes que participan formulen sus alegatos y que garanticen la posibilidad de poder demostrarlos. La defensa debe de garantizar la posibilidad de poder contradecir, así como también garantizar que los alegatos sean valorados por poder emitir la sentencia.

La perspectiva negativa está referida a la prohibición de la indefensión, la cual se refiere a las consecuencias que son producto de la violación del aval de la garantía procesal; consiste en el ilícito impedimento o restricción de los sujetos que efectivamente participan y de la falta de equidad de cualquier proceso; que podrían generar un desequilibrio en el proceso y que no se actúe bajo los mismos principios de racionalidad, legalidad y justicia. Este aspecto negativo demanda que el órgano jurisdiccional ejerza control sobre el abogado designado como defensor; con la finalidad de que ejerza la defensa técnica y sobrepase los determinados mínimos; ya que la defensa procesal es un requisito valido para la existencia jurídica del desarrollo del proceso; su falta de desarrollo genera inexistencia o invalidez jurídica del procedimiento penal.

Jauchen (2005) considera que la defensa material es ejecutada por el mismo imputado, consistiendo en que las expresiones defensivas se realizaran en el mismo proceso del desarrollo penal. San Martín (2003) afirma que la defensa penal constituye parte del derecho de la defensa de forma conjunta con la defensa técnica. Así mismo la defensa material está referida al derecho del imputado con la finalidad que realice su propia defensa; por lo cual deberá allanarse a la pretensión penal del Ministerio Público.

Figuerola (2017) considera que la defensa técnica demanda cierta experiencia en el desarrollo del proceso penal; esta actividad se realiza con la finalidad de que el abogado asesore de forma adecuada al imputado sobre sus deberes y derechos; así como también controlar la legalidad de todo lo actuado; la producción de pruebas de cargo y de descargo; además la exposición crítica de las pruebas y fundamentos basados en el enfoque doble de derecho y de hecho, recurriendo a las resoluciones judiciales.

Montero (1995); señala que existe relación entre el principio de contradicción y el derecho de asistencia del letrado; ya que no es suficiente con conocer las partes involucradas o la posibilidad de autodefenderse; es necesario acudir a desarrollar la defensa técnica del abogado; la cual no podrá ser ejercida por el imputado por que desconoce de los procedimientos técnicos.

### **III. METODOLOGIA**

#### **3.1. Diseño de investigación.**

La investigación está enmarcada en el enfoque cuantitativo, que según Hernández, Fernández y Baptista (2014), usa la recolección de datos, donde los resultados probarán o no la hipótesis, en base a una medición numérica y el análisis estadístico.

Asimismo, la investigación obedece a un tipo descriptivo, que según Hernández, Fernández y Baptista (2014), permite la descripción del hecho o fenómeno ocurrido, y se encuentra relacionado con el nivel o grado que fue concebido, de la misma manera, es de diseño descriptivo simple, y según Hernández ét. al (2014), no se realizan manipulación de variables, y permítela descripción de las características del hecho o fenómeno, recogándose los datos por única vez; y su esquema es:

M \_\_\_\_ O

Dónde:

M: Muestra

O: Observación realizada

#### **3.2. Variables y Operacionalización**

Variable: Efectividad del derecho de defensa. La efectividad del derecho de defensa es un servicio público elemental en un Estado de Derecho, por el cual se encargan a los jueces a fin de que resuelvan los conflictos jurídicos y se restablezca la paz social con justicia, tengan presente los derechos y garantías de las partes, especialmente del derecho de defensa. (Quiroga, 2018). Es así que toda persona sometida a persecución penal y aquella que es víctima del delito, tienen derecho a una tutela judicial efectiva, que comprende, entre otras, el derecho a la defensa publica eficaz que es un servicio público fundamental para la defensa de los derechos fundamentales. (Rosas, 2019).

(Anexo 1. Operacionalización de las variables)



### 3.3. Población y muestra.

Para Tamayo y Tamayo (2007), es el total de sujetos que participan en la investigación, que cuentan con características comunes, que son estudiadas y generan los datos para la investigación, y comprende 180 operadores de justicia del Distrito Judicial de Piura (de los cuales 60 son miembros de la Policía Nacional, 60 son miembros del Poder Judicial y 60 son miembros del Ministerio Público). De la misma manera, la muestra según Bavaresco (1994), es una porción parte que logra representar a la población, y se determina mediante el procedimiento del muestreo; y para efectos del estudio, tuvo una muestra censal, la totalidad de la población.

### 3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.

Técnica. Se utilizó la encuesta, y Cook (2002), señaló que es un cúmulo de preguntas que está dirigida a la muestra, y conocer opiniones o percepciones, y permite recoger datos de manera directa de los operadores de justicia.

Mediante instrumento. Se utilizó el cuestionario, y se elaboró a través de la operacionalización de la variable, con reactivos que permitieron la objetividad del estudio distribuida en cada dimensión de la variable. Se utilizó un cuestionario con la escala de Lickert, con escalas como: nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre con sus respectivos valores; con la finalidad de mediar las actitudes de los operadores de justicia. Para la elaboración de las preguntas, se tuvo en cuenta las dimensiones e indicadores relacionados a la efectividad del derecho de defensa.

**Tabla N° 1**

**Ficha Técnica: Cuestionario sobre Efectividad del Derecho de Defensa**

ASPECTOS COMPLEMENTARIOS	DETALLES
Objetivo:	Medir el nivel de efectividad del derecho de defensa
Tiempo:	30 minutos
Lugar:	Distrito Judicial de Piura
Administración:	Individual

Niveles	1: Bajo 2: Medio 3: Alto
Dimensiones:	Número de dimensiones: 4 Celeridad: 1 - 8 Economía procesal: 9 - 16 Transparencia 3: 17 - 24 Equidad: 25 - 32 Total = 32
Escala:	Politómica 1: Nunca 2: Casi nunca 3: A veces 4: Casi siempre 5: Siempre

Fuente: Elaborado por: Vilela Olivares Oscar Roberto

**Tabla N° 2.**

**Baremo sobre el cuestionario de Efectividad del Derecho de Defensa**

Niveles	Celeridad	Economía procesal	Transparencia	Equidad	Protocolo de tareas	Derecho de Defensa
<b>Bajo</b>	06 - 14	06 - 14	06 - 14	06 - 14	03 - 07	27 - 63
<b>Medio</b>	15 - 22	15 - 22	15 - 22	15 - 22	08 - 11	64 - 99
<b>Alto</b>	23 - 30	23 - 30	23 - 30	23 - 30	12 - 15	100 - 135

Fuente: Elaborado por: Vilela Olivares Oscar Roberto

**Tabla N° 3**

**Confiabilidad - Alfa Cronbach**

ALFA DE CRONBACH	INSTRUMENTO	N° DE ÍTEMS
0,838	Cuestionario sobre Efectividad del Derecho de Defensa	27

Fuente: Elaborado por: Vilela Olivares Oscar Roberto

El resultado del Alfa de Cronbach, arrojo 0,838, indicando una confiabilidad alta, procediendo a aplicar el instrumento.

### **3.5. Procedimiento.**

El procedimiento que se desarrollo en el presente estudio implico el recojo y sistematización de la información; para luego organizar el marco teórico y poder proceder a la construcción de los instrumentos; los cuales fueron validados por docentes expertos en el tema metodológico y de gestión pública; dichos instrumentos tras su aplicación se procesaron estadísticamente y fueron consignados en los resultados de la investigación.

### **3.6. Método de análisis de datos.**

En el procesamiento estadístico fue utilizada una estadística descriptiva, que permitió determina el nivel de percepción de la variable percibida por los sujetos de la muestra, elaborándose tablas y figuras estadísticas para cada dimensión y variable

### **3.7. Aspectos éticos.**

Mientras se realice la elaboración de la investigación se tendrá en cuenta el formal respeto a los derechos de propiedad intelectual de los autores que se citarán apropiadamente según las normas APA. Durante la recolección de la información se solicitará el consentimiento al personal que encuestaremos, los cuales serán partícipes de la recolección de datos, guardando su información personal en los instrumentos de aplicación.

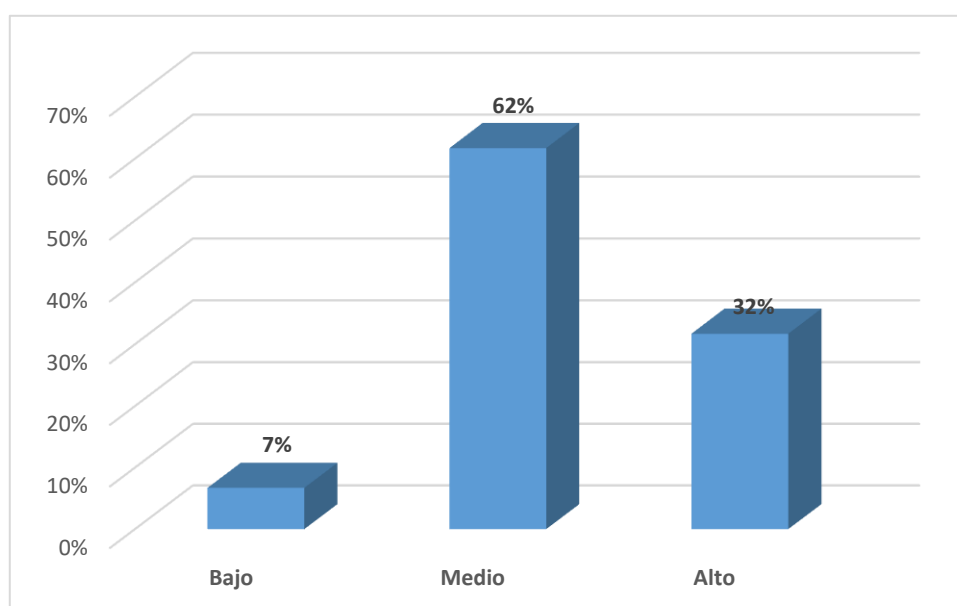
#### IV. RESULTADOS

**Tabla N° 4**

**Nivel de la dimensión celeridad**

NIVELES	FRECUENCIAS (FI)	PORCENTAJE (%)
Bajo	12	6,7
Medio	111	61,7
Alto	57	31,7
<b>TOTAL</b>	<b>180</b>	<b>100.0</b>

Fuente: Elaborado por: Vilela Olivares Oscar Roberto



**Figura N° 1:** Niveles de la dimensión celeridad

Fuente: Elaborado por: Vilela Olivares Oscar Roberto

**Interpretación:** En la Tabla N° 4 y figura N° 1, niveles de la dimensión celeridad, se puede apreciar que el 61,7% de los operadores de justicia percibe un nivel medio, el 31,7% percibe un nivel alto, en tanto que el 6,7% un nivel bajo, por lo tanto, se puede apreciar que la mayoría percibe un nivel medio en la dimensión celeridad procesal.

**Tabla N° 5**

**Nivel de la dimensión economía procesal**

NIVELES	FRECUENCIAS (FI)	PORCENTAJE (%)
Bajo	10	5,6
Medio	97	53,9
Alto	73	40,6
<b>TOTAL</b>	<b>180</b>	<b>100.0</b>

Fuente: Elaborado por: Vilela Olivares Oscar Roberto

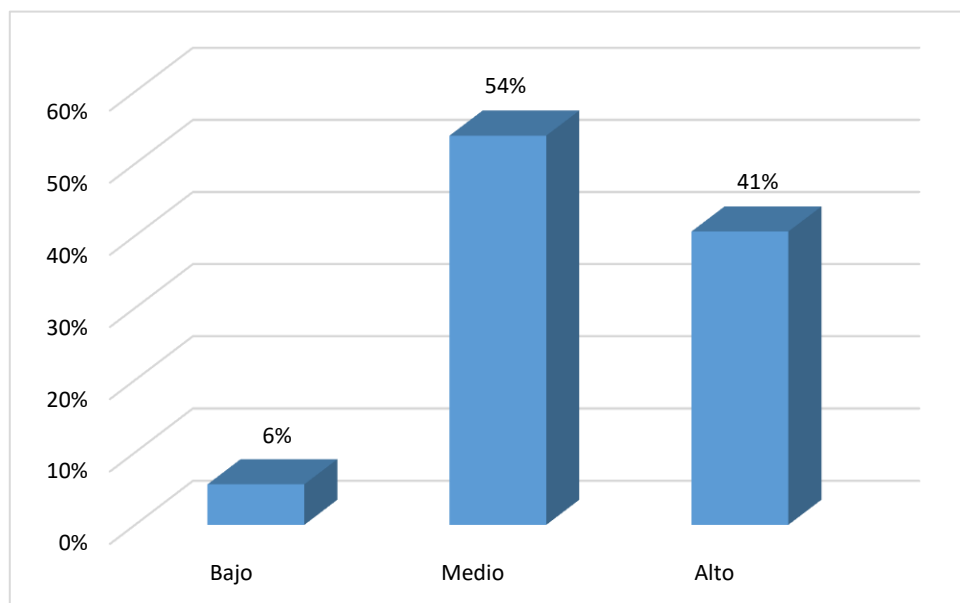


Figura N°2: Niveles de la dimensión economía procesal

Fuente: Elaborado por: Vilela Olivares Oscar Roberto

**Interpretación:** En la tabla N° 5 y figura N° 2, en la dimensión economía procesal, se puede apreciar que el 53,9% de los operadores percibe un nivel medio, el 40,6% un nivel alto, mientras que, el 5,6% un nivel bajo; por lo tanto, se puede inferir que la mayoría de los encuestados perciben un nivel medio en la dimensión economía procesal.

**Tabla N° 6**

**Nivel de la dimensión Publicidad**

NIVELES	FRECUENCIAS (FI)	PORCENTAJE (%)
Bajo	11	6,1
Medio	103	57,2
Alto	66	36,7
<b>TOTAL</b>	<b>180</b>	<b>100.0</b>

Fuente: Elaborado por: Vilela Olivares Oscar Roberto

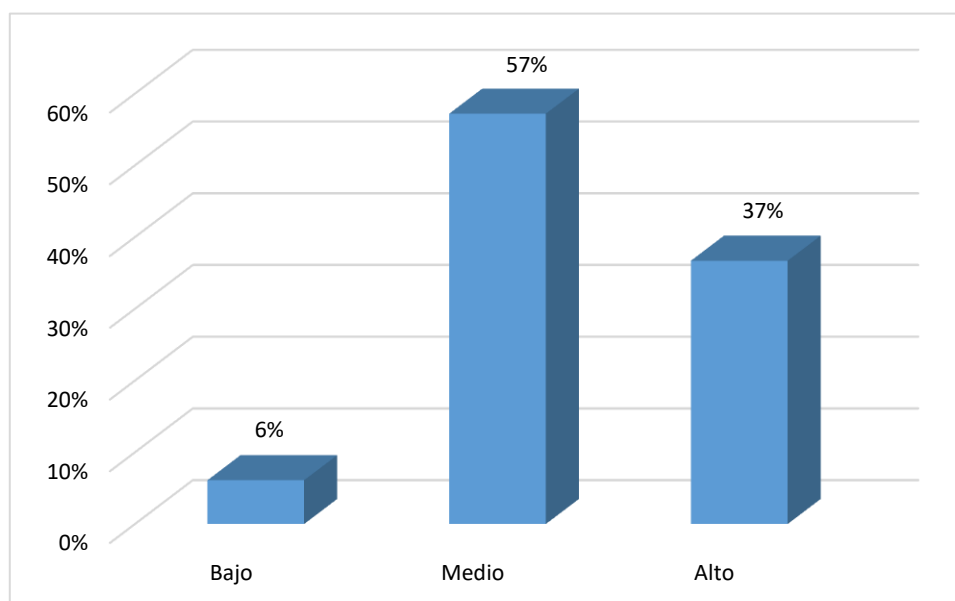


Figura N°3. Niveles de la dimensión publicidad

Fuente: Elaborado por: Vilela Olivares Oscar Roberto

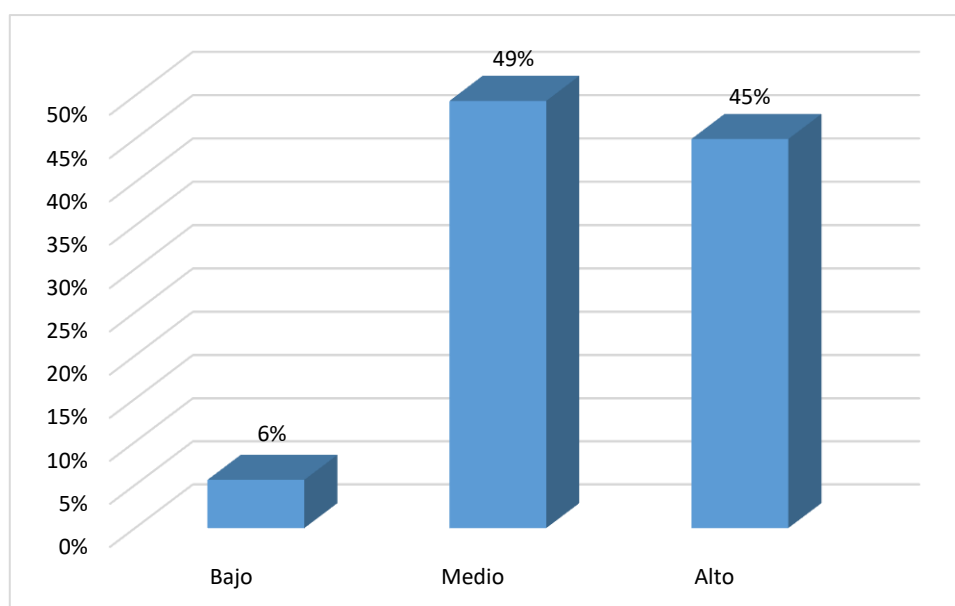
**Interpretación.** En la tabla N° 6 y figura N° 3, en la dimensión transparencia de la administración de justicia, el 57,2% de los operadores de justicia percibe un nivel medio, el 36,7% un nivel alto, y el 6,1% un nivel bajo; por lo tanto, se puede apreciar que la mayoría de los entrevistados perciben un nivel medio de la dimensión transparencia de la administración de justicia.

**Tabla N° 7**

**Nivel de la dimensión Equidad**

NIVELES	FRECUENCIAS (FI)	PORCENTAJE (%)
Bajo	10	5,6
Medio	89	49,4
Alto	81	45,0
<b>TOTAL</b>	<b>180</b>	<b>100.0</b>

Fuente: Elaborado por: Vilela Olivares Oscar Roberto



**Figura N° 4. Nivel de la dimensión equidad**

Fuente: Elaborado por: Vilela Olivares Oscar Roberto

**Interpretación.** En la tabla N° 7 y figura N° 4, en la dimensión equidad, se puede apreciar que el 49,4% de los encuestados perciben un nivel medio, el 45,0% un nivel alto, mientras que el 5,6% un nivel bajo, de lo que se puede inferir que la mayoría de los encuestados refieren que el nivel de la dimensión equidad de la administración de justicia es medio.

**Tabla N° 8**

**Nivel de la dimensión Protocolos de tareas**

NIVELES	FRECUENCIAS (FI)	PORCENTAJE (%)
Bajo	20	11,1
Medio	100	55,6
Alto	60	33,3
<b>TOTAL</b>	<b>180</b>	<b>100.0</b>

Fuente: Elaborado por: Vilela Olivares Oscar Roberto

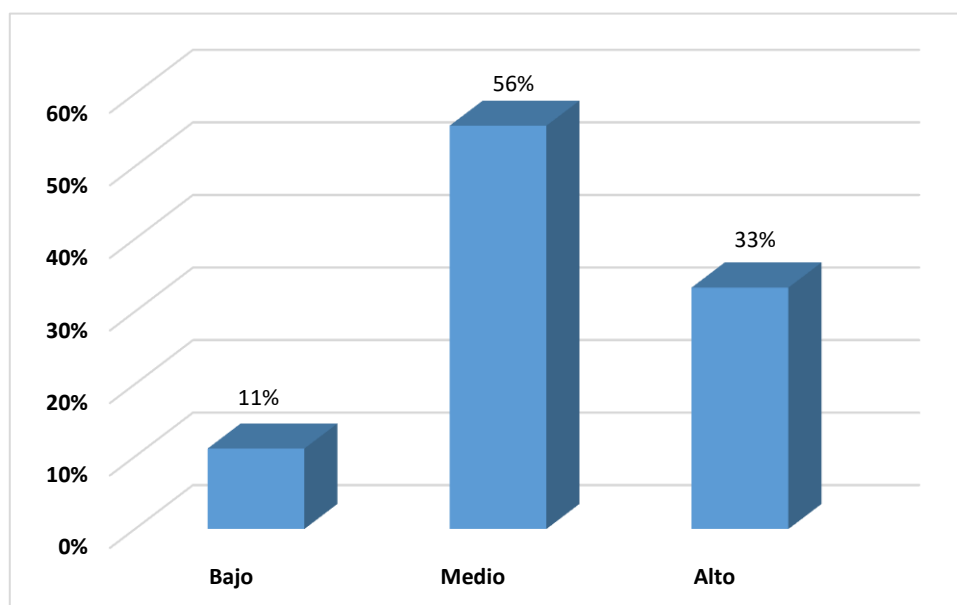


Figura N° 5. Niveles de la dimensión protocolos de tareas

Fuente: Elaborado por: Vilela Olivares Oscar Roberto

**Interpretación.** De la tabla N° 8 y la figura N° 5, de la dimensión protocolos de tareas de la administración de justicia, se tiene que el 55,6% de los encuestados perciben un nivel medio, el 33,3% refieren que el nivel es alto, en tanto que, el 11,1% señalan que el nivel es bajo, de manera que, se puede advertir que la mayoría de los encuestados consideran un nivel medio de la dimensión de protocolos de tareas de la administración de justicia.

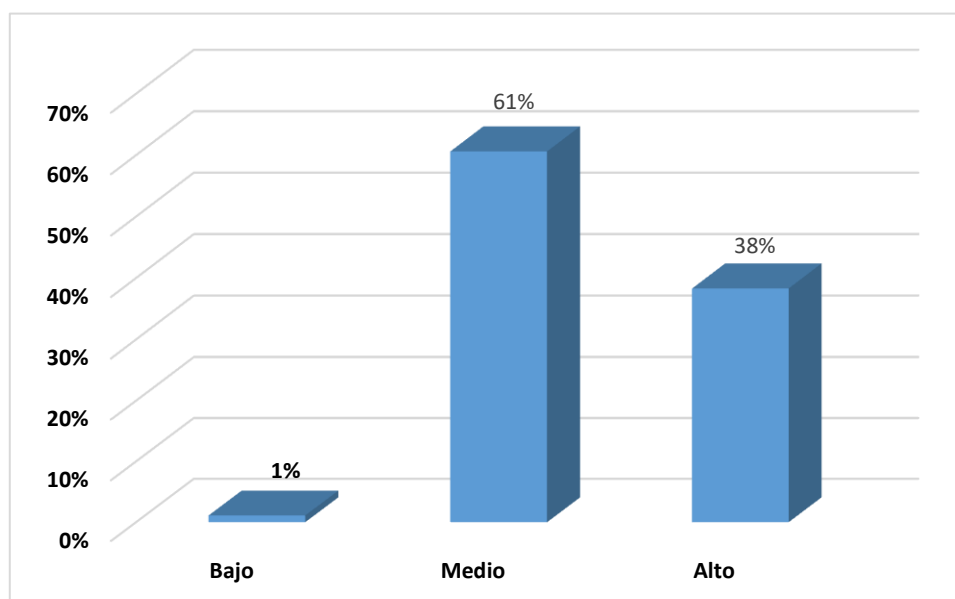


**Tabla N° 9**

**Distribución de niveles de la variable Efectividad del derecho de defensa**

NIVELES	FRECUENCIAS (FI)	PORCENTAJE (%)
Bajo	2	1,1
Medio	109	60,6
Alto	69	38,3
<b>TOTAL</b>	<b>180</b>	<b>100</b>

Fuente: Elaborado por: Vilela Olivares Oscar Roberto



hFigura N° 6. Distribución de niveles de la variable efectividad del derecho de defensa

Fuente: Elaborado por: Vilela Olivares Oscar Roberto

**Interpretación.** En la tabla N° 9 y figura N° 6, de la variable administración de justicia, se puede apreciar que el 60,6% de los encuestados perciben un nivel medio, el 38,3% perciben un nivel alto, mientras que el 1,1% de los encuestados perciben un nivel bajo, de lo que se infiere que la mayoría de los encuestados advierten un nivel medio de la administración de justicia.

## V. DISCUSIÓN

Una vez obtenidos los resultados antes mencionados, se puede apreciar una prevalencia del nivel medio en la efectividad del derecho de defensa en el Distrito Judicial de Piura. Según la percepción de los operadores de justicia sobre el desempeño de la defensa pública, tenemos que se cumple con garantizar un servicio óptimo del *ejercicio del derecho de defensa*, por lo que en este punto se cumple con los estándares que requieren los organismos de justicia, entiéndase la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nuestro Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de Justicia de la República; instituciones que han recalcado la importancia de que los usuarios del sistema de Justicia (imputados o procesados), cuenten con una defensa pública eficaz, que es la concretización de un derecho fundamental.

Aquí se coincide con los trabajos del profesor San Martín (2017) sobre el derecho de defensa en el proceso penal, así como también el ensayo del profesor Ore (2016) sobre el derecho de defensa en el NCPP, en donde se advierten que el servicio de justicia de la defensa Pública debe ser eficaz, y no meramente simbólica o formal, sino activa o protagónica, dado que el Estado a través del Ministerio Público tiene funciones delimitadas, y cuenta con el apoyo de una serie de entidades públicas y privadas para perseguir el delito, y probar la culpabilidad de los presuntos delincuentes, por lo que la *contrapartida* tiene que ser una defensa pública eficiente, o como también se conoce en la doctrina que hemos transcrito, una defensa eficaz, *máxime* si a través de este servicio de justicia se busca proteger la libertad personal del investigado, siendo un derecho fundamental establecido en nuestra Constitución Política (art.139°) e instrumentos Internacionales de Derechos Humanos de los que nuestro país es suscriptor, valga agregar, que todo los Estados del orbe tienen consagrado en el catálogo de derechos fundamentales el derecho de defensa.

En esta línea argumentativa, de los resultados obtenidos se aprecia que existe una prevalencia en el nivel medio respecto de la celeridad de la efectividad del derecho de defensa, según los operadores de justicia del Distrito Judicial de Piura, habíamos anotado que Larsen (2015) en su trabajo sobre el derecho de defensa en los procesos penales, había señalado que no existe celeridad en el servicio de

la defensa pública en los sistemas procesales penales de corte inquisitivo, lo que repercutía negativamente en la afectación del derecho de defensa de los procesados.

Esa situación ha cambiado sustancialmente, en efecto, muy por el contrario de que nos muestra nuestra encuesta, que el nivel de celeridad es medio, tengamos presente que los Estados como parte de la reforma emprendida en la administración de justicia, a consecuencia de la aplicación del Código Procesal Penal del 2004, restructuró y fortaleció la institución de la Defensa Pública, de lo cual dimos cuenta en el desarrollo de nuestra investigación, lo que generó que los miembros de esta entidad pública sean capacitados para brindar un servicio público de calidad, sea en la litigación de los casos bajo su responsabilidad, o sea en la información sobre el estado de las causas a los usuarios a quienes defienden, lo que se refleja en los resultados de esta encuesta analizada.

En cuanto a la dimensión economía procesal, se tiene que el 53,9% de los operadores de justicia perciben un nivel medio de efectividad del derecho de defensa, recordemos que el trabajo de Sánchez Velarde (2015) sobre la aplicación del Código Procesal Penal, a raíz de la reforma procesal penal con la instauración del modelo acusatorio adversarial, afirmó que los procesos penales se extendían más allá de los plazos procesales establecidos en la ley anterior (Código de Procedimientos Penales de 1940), y muchas veces las apelaciones se demoraban en resolver exageradamente, pero, con la dación del Código Procesal Penal de 2004, los plazos procesales son más razonables y se han establecido mecanismos de simplificación procesal (terminación anticipada, acuerdos reparatorios, etc) que permiten economizar y racionalizar los plazos y etapas del proceso, los cuales han sido debidamente utilizados por los defensores públicos en beneficio de los usuarios del sistema de justicia, ello, tiene relación con la percepción de los encuestados que han percibido ese cambio favorable para el justiciable.

Así mismo, de los resultados obtenidos en la dimensión publicidad en la efectividad del derecho de defensa se aprecian que, con una prevalencia del 57,2% de los encuestados, se tiene que la mayoría de los operadores de justicia perciben que existe un nivel medio en la publicidad de la efectividad del derecho

de defensa, recordemos los trabajos de Rosas Yataco (2014) sobre la reforma del proceso penal y la importancia de los derechos fundamentales en el proceso penal, como también los estudios de Binder (2015) sobre el rol de los sujetos procesales en el modelo acusatorio adversarial, ambos coinciden que el proceso penal acusaba de secretismo y privacidad, no existiendo publicidad de los actos procesales ni de las decisiones judiciales del Juez, sino, por el contrario, se resolvía en la “oscuridad”, y se enteraban del resultado de la decisión judicial a través de diversas fuentes (preguntando, cuando no “rogando” al secretario o asistente judicial), a diferencia del nuevo modelo procesal penal, en donde las audiencias son públicas y transparentes, existiendo incluso las resoluciones orales que se expiden en el acto de la audiencia pública, en esto también coadyuvaba la defensa pública (defensores de oficio) con el antiguo Código de Procedimientos Penales de 1940. Sin embargo, la situación ha cambiado sustancialmente con el Código Procesal Penal del 2004, siendo los actos procesales públicos, y en ello han coadyuvado los miembros de la actual Defensoría Pública, lo cual ha sido reflejado en los resultados de la encuesta a los operadores de justicia, que han notado ese cambio a favor de los usuarios (procesados y víctimas).

Igualmente, en lo concerniente a los resultados obtenidos en la dimensión equidad de la efectividad del derecho de defensa, con una prevalencia del 49,4% en el nivel medio, se puede afirmar que la mayoría de los operadores de justicia encuestados perciben que existe un nivel medio de equidad, en la efectividad del derecho de defensa, este cambio obedece, qué duda cabe, a la vigencia del Código Procesal Penal del 2004, en donde los defensores públicos a cargo del ejercicio del derecho de defensa, han sido debidamente capacitados no sólo en cuanto a conocimientos especializados, sino también, en cuanto al trato con los usuarios y una defensa efectiva y sólida de los derechos de los justiciables (imputados). La nueva defensoría pública ha entendido el sentido de la reforma procesal penal sobre el cambio del paradigma, en cuanto a que los sujetos procesales (imputados y víctimas) son personas y no objetos o cosas, como eran tratados en el antiguo sistema procesal penal inquisitivo.

Finalmente, en cuanto a los resultados en la dimensión sobre el cumplimiento de los protocolos de tareas de la efectividad del derecho de defensa, se tiene que

hay una prevalencia del 55,6% en el nivel medio, por lo que se puede afirmar que la mayoría de los operadores de justicia perciben que existe un nivel medio en el cumplimiento de los protocolos de tareas de efectividad del derecho de defensa, a partir de la vigencia del Código Procesal Pena del 2004, lo cual se aprecia en el cumplimiento por parte de la defensoría pública, de la tramitación de los expedientes a nivel interno (carpetas defensoriales), como en el horario laboral designado reglamentariamente (horario de atención en turnos y fuera de ellos con detenidos).

## **VI. CONCLUSIONES**

1. Se determinó un nivel medio de efectividad del derecho de defensa a través de la Defensoría Pública en el Distrito Judicial de Piura a partir de la vigencia del Código Procesal Penal 2019, según la percepción de los operadores de justicia existiendo un prevalente 60,6% en el nivel medio.
2. Se determinó un nivel medio de celeridad de efectividad del derecho de defensa a través de la Defensoría Pública en el Distrito Judicial de Piura a partir de la vigencia del Código Procesal Penal 2019, según la percepción de los operadores de justicia existiendo un prevalente 61,7% en el nivel medio.
3. Se determinó un nivel medio en la economía procesal de efectividad del derecho de defensa a través de la Defensoría Pública en el Distrito Judicial de Piura a partir de la vigencia del Código Procesal Penal 2019, según la percepción de los operadores de justicia existiendo un prevalente 53,9% en el nivel medio.
4. Se determinó un nivel medio en la transparencia de efectividad del derecho de defensa a través de la Defensoría Pública en el Distrito Judicial de Piura a partir de la vigencia del Código Procesal Penal 2019, según la percepción de los operadores de justicia existiendo un prevalente 57,2% en el nivel medio.
5. Se determinó un nivel medio en el cumplimiento del protocolo de tareas de efectividad del derecho de defensa a través de la Defensoría Pública en el Distrito Judicial de Piura a partir de la vigencia del Código Procesal Penal 2019, según la percepción de los operadores de justicia existiendo un prevalente 55,6% en el nivel medio.

## **VII. RECOMENDACIONES**

1. Se recomienda una mayor supervisión sobre la efectividad del derecho de defensa, a partir de la vigencia del Código Procesal Penal, por cuanto de acuerdo a los operadores de justicia se cumple en un nivel medio, debiendo esforzarse en llegar a un nivel alto.
2. Mayor celeridad sobre la efectividad del derecho de defensa, a partir de la vigencia del Código Procesal Penal, dado que de acuerdo a los operadores de justicia se cumple en un nivel medio, debiendo tener como meta llegar a un nivel alto en beneficio de los justiciables.
3. Será necesario generar una mayor economía procesal sobre la efectividad del derecho de defensa en el Distrito Judicial de Piura, a partir de la vigencia del Código Procesal Penal, en razón de que conforme a lo informado por los operadores de justicia se cumple en un nivel medio, debiendo tener como objetivo llegar a un nivel alto para beneficio de los usuarios del servicio de justicia.
4. Se recomienda una mayor publicidad sobre la efectividad del derecho de defensa en el Distrito Judicial de Piura, a partir de la vigencia del Código Procesal Penal, dado que según a lo señalado por los operadores de justicia se cumple en un nivel medio, debiéndose tener como meta llegar a un nivel alto para beneficio de los justiciables.
5. Es necesario una mayor equidad en la efectividad del derecho de defensa en el Distrito Judicial de Piura, a partir de la vigencia del Código Procesal Penal, debido a que según lo señalado por los operadores de justicia se cumple en un nivel medio, debiéndose tener como objetivo llegar a un nivel alto.
6. Se recomienda un mayor cumplimiento del protocolo de tareas en aras de una efectividad del derecho de defensa, a partir de la vigencia del Código Procesal Penal, dado que según los operadores de justicia se cumple en un nivel medio, debiéndose tener como objetivo llegar a un nivel alto, para beneficio de los justiciables (procesados y víctimas).

## REFERENCIAS

- Barton, S. (2015). *“Introducción a la defensa penal”*, Ed. Hammurabi, Buenos Aires.
- Binder, A. (2013), *“Introducción al derecho procesal penal”*, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2ª edic.
- Bustamante, R. (2011). *“Derechos fundamentales y proceso justo”*. Lima: ARA Editores.
- Castillo, L. (2014). La Administración de Justicia en un Estado Constitucional de Derecho, Gaceta Penal, Lima.
- Fábrega, J. (1997). *La defensa eficaz en la jurisprudencia nacional*. Santa Fe de Bogotá, D.C.: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez.
- Miguélez, F. (2001) “El derecho a la tutela judicial efectiva”. Cuadernos de Derecho Constitucional, XIX, Barcelona.
- López, J. (1999). *“Instituciones de Derecho Procesal Penal”*. Madrid: AKAL/IURE.
- Larsen, P. (2016). “Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Ed. Hammurabi, Buenos Aires.
- Mixan, F. (2006). *“Cuestiones Epistemológicas y Teoría de la Investigación y de la Prueba”*, Trujillo: ediciones BLG.
- Nakasaki, C. (2016). *“El Derecho penal y procesal penal”*, Gaceta Jurídica, Lima.
- Nino, C. (2014). *“Derecho, moral y política. Una revisión de la teoría general del derecho”*, Ed. Siglo XII, Buenos Aires.
- Picó, I. y JUNOY, J. (1996). *La Administración de Justicia*. Barcelona: José María Bosch Editor S.A., 1996.
- Parra, J. (1997). *“El derecho de defensa”*. En: *Ius et veritas*. Año VIII, No. 14. Lima: Revista editada por estudiantes de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.



Roxin, C. (2000). "*Derecho Procesal Penal*". Buenos Aires: Editores Del Puerto.

Roxin, C. (2009). "*Presente y futuro de la defensa en el proceso penal del Estado de Derecho*", en *Pasado, presente y futuro del derecho procesal penal*, Buenos Aires, Ed. Rubinzal-Culzoni.

Sanmartin, C. (2017). "*Derecho Procesal Penal*". Lima: Grijley.

Silvestroni, M. (2011). "Manual del abogado defensor", Ed. del Puerto, Buenos Aires.

Varela, C. (1990). *Valoración de la prueba*. Buenos Aires: Editorial Astrea.

## **ANEXOS**

## ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA

PROBLEMA	OBJETIVO	Variables e Indicadores				
		<i>Variable: Efectividad del derecho de defensa</i>				
		Dimensiones	Indicadores	Ítems	Escala de Medición	Niveles y Rangos
<b>Problema General</b> ¿Cuál es el nivel de efectividad del derecho de defensa a través de la Defensoría Pública a partir de la vigencia del Código Procesal Penal 2019, según la percepción de los operadores de justicia?  <b>Problemas Específicos</b>	<b>Objetivo general</b> Determinar el nivel de efectividad del derecho de defensa a través de la defensoría pública en el Distrito Judicial de Piura a partir de la vigencia del Código Procesal Penal 2019, según la percepción de los operadores de justicia.  <b>Objetivos específicos</b> Determinar el nivel de celeridad	Celeridad	Plazo procesal Seguimiento de trámites	1, 2, 3 4, 5, 6	Nunca (1)	Bajo (27 - 62)  Medio (63 - 99)  Alto (100 - 135)
		Economía Procesal	Inversión Presupuesto	7, 8, 9 10, 11, 12	Casi nunca (2)	
		Publicidad	Audiencias Públicas Información de Expedientes	13, 14, 15 16, 17, 18	A veces (3) Casi nunca (4)	
		Equidad	Buen trato Igualdad	19, 20, 21 22, 23, 24	Siempre (5)	
		Protocolo de Tareas	Uniformidad de acciones	25, 26, 27		

<p>¿Cuál es el nivel de celeridad del derecho de defensa a través de la defensoría pública a partir de la vigencia del Código Procesal Penal 2019, según la percepción de los operadores de justicia?</p> <p>¿Cuál es el nivel de economía procesal del derecho de defensa a través de la defensoría pública a partir de la vigencia del Código Procesal Penal 2019, según la percepción de los operadores de justicia?</p> <p>¿Cuál es el nivel de publicidad del derecho de defensa a través de la defensoría pública a partir de la vigencia del Código Procesal Penal 2019, según la</p>	<p>del derecho de defensa a través de la defensoría pública en el Distrito Judicial de Piura a partir de la vigencia del Código Procesal Penal 2019, según la percepción de los operadores de justicia.</p> <p>Determinar el nivel de economía procesal del derecho de defensa a través de la defensoría pública en el Distrito Judicial de Piura a partir de la vigencia del Código Procesal Penal 2019, según la percepción de los operadores de justicia</p> <p>Determinar el nivel de publicidad del derecho de defensa a través de la defensoría pública en el Distrito Judicial de Piura a partir de la vigencia del Código Procesal Penal 2019, según la percepción de los operadores de justicia</p> <p>Determinar el nivel de equidad</p>					
--	--	--	--	--	--	--

<p>percepción de los operadores de justicia?</p> <p>¿Cuál es el nivel de equidad del derecho de defensa a través de la defensoría pública a partir de la vigencia del Código Procesal Penal 2019, según la percepción de los operadores de justicia?</p> <p>¿Cuál es el nivel en el protocolo de tareas del derecho de defensa a través de la defensoría Pública a partir de la vigencia del Código Procesal Penal 2019, según la percepción de los operadores de justicia?</p>	<p>del derecho de defensa a través de la defensoría pública en el Distrito Judicial de Piura a partir de la vigencia del Código Procesal Penal 2019, según la percepción de los operadores de justicia.</p> <p>Determinar el nivel en el protocolo de tareas del derecho de defensa a través de la defensoría pública en el Distrito Judicial de Piura a partir de la vigencia del Código Procesal Penal 2019, según la percepción de los operadores de justicia.</p>					
---	---	--	--	--	--	--

Fuente: Elaborado por: Vilela Olivares Oscar Roberto

## ANEXO 2: INSTRUMENTO

### ***Cuestionario para medir la efectividad del derecho de defensa a través de la Defensoría Pública***

Estimado (a) Señor (a):

El presente documento es anónimo y su aplicación será de utilidad para mi investigación, por ello solicito su colaboración-

Marque con un aspa "X" a la respuesta que considere acertada con su punto de vista, según las siguientes alternativas.

**N: Nunca (1) CS: Casi nunca (2) AV: A veces (3) Casi siempre (4) S: Siempre (5).**

N°	CELERIDAD (PLAZO PROCESAL)	ESCALAS				
		S	CS	AV	CS	S
1	¿Los defensores públicos están pendientes de que se respeten los plazos procesales según el Código Procesal Penal?					
2	¿Cuándo los plazos procesales no se cumplen los defensores públicos solicitan audiencia de control de plazos?					
3	¿Los defensores públicos presentan sus escritos dentro de los plazos procesales pertinentes?					
CELERIDAD (SEGUIMIENTO DE TRÁMITES)						
4	¿Los defensores públicos hacen seguimiento regular de los trámites de los procesos a su cargo?					
5	¿Los defensores públicos presentan pedidos para que se respete el trámite regular de las investigaciones cuando se dilata innecesariamente?					
6	¿Los defensores públicos hacen sus pedidos dentro del trámite regular conforme lo establece el Código Procesal Penal?					
ECONOMÍA PROCESAL (INVERSIÓN)						
7	¿Los defensores públicos hacen pedidos para instar la aplicación de los mecanismos de simplificación procesal cuando corresponda?					
8	¿Los defensores públicos hacen pedidos maliciosos para dilatar el proceso penal?					
9	¿Los defensores públicos participan activamente en los procesos especiales establecidos en el Código Procesal Penal para agilizar y economizar la investigación penal?					

<b>ECONOMÍA PROCESAL (PRESUPUESTO)</b>					
<b>10</b>	¿Los defensores públicos actúan prudentemente evitando solicitar audiencias que generan gasto innecesario al proceso?				
<b>11</b>	¿Los defensores públicos solicitan ayuda de entidades públicas locales para la realización de sus peritajes evitando que las realicen en Lima con el costo que significa para el proceso?				
<b>12</b>	¿Los defensores públicos hacen uso de las herramientas legales del Código Procesal Penal para solicitar auxilio judicial a favor de sus patrocinados cuando se requiera?				
<b>PUBLICIDAD (AUDIENCIAS PÚBLICAS)</b>					
<b>13</b>	¿Los defensores públicos participan activamente en todas las audiencias públicas cuando se les requiere?				
<b>14</b>	¿Los defensores públicos actúan corporativamente en las audiencias públicas cuando son complejas?				
<b>15</b>	¿Los defensores públicos hacen sus pedidos oralmente en audiencia pública y lo fundamentan en ese acto siguiendo los parámetros del Código Procesal Penal?				
<b>PUBLICIDAD (INFORMACIÓN DE SENTENCIAS)</b>					
<b>16</b>	¿Los defensores públicos solicitan que se les notifique sobre el contenido de las sentencias para interponer los recursos pertinentes?				
<b>17</b>	¿Los defensores públicos están presente cuando se emiten públicamente las sentencias o autos en la fecha señalada por el magistrado?				
<b>18</b>	¿Los defensores públicos peticionan que las decisiones sobre las sentencias sean emitidas públicamente en el plazo establecido en el Código Procesal Penal?				
<b>EQUIDAD (BUEN TRATO)</b>					
<b>19</b>	¿Los defensores públicos solicitan que sus defendidos sean tratados con respeto a su dignidad?				
<b>20</b>	¿Los defensores públicos son respetuosos con los demás sujetos procesales al momento de exponer sus argumentos de defensa?				
<b>21</b>	¿Los defensores públicos realizan su actividad profesional durante el proceso penal conforme a los principios del Código de ética de la función pública?				

<b>EQUIDAD (IGUALDAD)</b>					
<b>22</b>	¿Los defensores públicos son tratados en igualdad de condiciones que los demás sujetos procesales?				
<b>23</b>	¿Los defensores públicos cuentan con las mismas posibilidades logísticas y humanas para realizar su trabajo en el proceso penal?				
<b>24</b>	¿Los defensores públicos de acuerdo a la capacidad física o psicológica de sus defendidos solicitan un trato especial para estos en razón de su discapacidad?				
<b>PROTOCOLO DE TAREAS (UNIFORMIDAD DE ACCIONES)</b>					
<b>25</b>	¿Los defensores públicos realizan un trabajo uniforme cuando actúan corporativamente en las audiencias que son convocados?				
<b>26</b>	¿Los defensores públicos respetan los cronogramas establecidos en los turnos cuando son convocados para las audiencias o diligencias en el proceso penal?				
<b>27</b>	¿Los defensores públicos tienen planes de contingencia cuando no pueden acudir a alguna diligencia que son convocados por casos de fuerza mayor o caso fortuito?				

**GRACIAS POR SU ATENCIÓN**



FICHA DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS

TEMA DE TESIS: "DERECHO DE DEFENSA Y LA VIGENCIA DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL EN LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL DISTRITO JUDICIAL DE PIURA 2019"

Indicadores	Criterios	Deficiente 0 – 20				Regular 21 – 40				Buena 41 – 60				Muy Buena 61 – 80				Excelente 81 – 100				OBSERVAC.
ASPECTOS DE VALIDACION		0	5	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
1.Clareidad	Esta formulado con un lenguaje apropiado																			X		NINGUNA
2.Objetividad	Esta expresado en conductas observables																				X	NINGUNA
3.Actualidad	Adecuado al enfoque teórico abordado en la investigación																			X		NINGUNA
4.Organización	Existe una organización lógica entre sus ítems																				X	NINGUNA
5.Suficiencia	Comprende los aspectos necesarios en cantidad y calidad.																			X		NINGUNA

6. Intencionalidad	Adecuado para valorar las dimensiones del tema de la Investigación																				X		NINGUNA
7. Consistencia	Basado en aspectos teóricos-científicos de la Investigación																				X		NINGUNA
8. Coherencia	Tiene relación entre las variables e indicadores																				X		NINGUNA
9. Metodología	La estrategia responde a la elaboración de la Investigación																			X			NINGUNA

**INSTRUCCIONES:** Este instrumento, sirve para que el EXPERTO EVALUADOR evalúe la pertinencia, eficacia del Instrumento que se está validando. Deberá colocar la puntuación que considere pertinente a los diferentes enunciados.

Piura, 5 de noviembre del 2019.

Nombre y Apellidos Dr. Cristian Jurado Fernández  
DNI 17814492  
Teléfono 954 978 830  
E-mail: jfernandezca@ucvvirtual.edu.pe



FIRMA

### CONSTANCIA DE VALIDACION

Yo, **Cristian Augusto Jurado Fernández**; con DNI N° 17614492; profesión docente universitario; Doctor en Gestión Universitaria; desempeñandome actualmente como Docente Universitario; en la Universidad César Vallejo filial Piura; por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de validación los Instrumentos los cuales se aplicaran en el proceso de la Investigación.

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones.

INTRUMENTOS	DEFICIENTE	ACEPTABLE	BUENO	MUY BUENO	EXCELENTE
1. Claridad					X
2. Objetividad					X
3. Actualidad				X	
4. Organización					X
5. Suficiencia				X	
6. Intencionalidad					X
7. Consistencia					X
8. Coherencia					X
9. Metodología				X	

En señal de conformidad firmo la presente en la ciudad de Piura 05 de noviembre del 2019.

Apellidos y Nombres : Dr. Cristian Augusto Jurado Fernández

DNI : 17614492

Especialidad : Doctor en Gestión Universitaria

E-mail : cfermandezca@ucvvirtual.edu.pe

  
 \_\_\_\_\_  
 Dr. Cristian Jurado Fernández

FICHA DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS

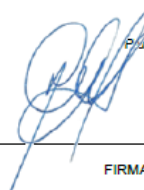
TEMA DE TESIS: "DERECHO DE DEFENSA Y LA VIGENCIA DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL EN LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL DISTRITO JUDICIAL DE PIURA 2019"

Indicadores	Criterios	Deficiente 0 – 20				Regular 21 – 40				Buena 41 – 60				Muy Buena 61 – 80				Excelente 81 – 100				OBSERVAC.
ASPECTOS DE VALIDACION		0	5	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
1.Clareidad	Esta formulado con un lenguaje apropiado																			X	X	NINGUNA
2.Objetividad	Esta expresado en conductas observables																				X	NINGUNA
3.Actualidad	Adecuado al enfoque teórico abordado en la investigación																			X		NINGUNA
4.Organización	Existe una organización lógica entre sus ítems																				X	NINGUNA
5.Suficiencia	Comprende los aspectos necesarios en cantidad y calidad.																			X		NINGUNA

6. Intencionalidad	Adecuado para valorar las dimensiones del tema de la Investigación																				X		NINGUNA
7. Consistencia	Basado en aspectos teóricos-científicos de la Investigación																				X		NINGUNA
8. Coherencia	Tiene relación entre las variables e indicadores																				X		NINGUNA
9. Metodología	La estrategia responde a la elaboración de la Investigación																			X			NINGUNA

**INSTRUCCIONES:** Este instrumento, sirve para que el EXPERTO EVALUADOR evalúe la pertinencia, eficacia del Instrumento que se está validando. Deberá colocar la puntuación que considere pertinente a los diferentes enunciados.

Nombre y Apellidos Dr. Augusto Franklin Mendiburu Rojas  
DNI 18041600  
Teléfono 948 169 690  
E-mail: fmendiburu12@hotmail.com

  
Firma, 5 de noviembre del 2019.  
FIRMA

### CONSTANCIA DE VALIDACION

Yo, **Augusto Franklin Mendiburu Rojas**; con DNI N° 18041600; profesión docente universitario; Doctor en Gestión Pública; desempeñándome actualmente como Docente Universitario; en la Universidad César Vallejo filial Piura; por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de validación los Instrumentos los cuales se aplicaran en el proceso de la Investigación.

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones.

INTRUMENTOS	DEFICIENTE	ACEPTABLE	BUENO	MUY BUENO	EXCELENTE
1. Claridad					X
2. Objetividad					X
3. Actualidad				X	
4. Organización					X
5. Suficiencia				X	
6. Intencionalidad					X
7. Consistencia					X
8. Coherencia					X
9. Metodología				X	

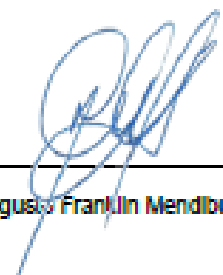
En señal de conformidad firmo la presente en la ciudad de Piura 05 de noviembre del 2019.

Apellidos y Nombres : Dr. Augusto Franklin Mendiburu Rojas

DNI : 18041600

Especialidad : Doctor en Gestión Pública

E-mail : fmendiburu12@hotmail.com


  
 Dr. Augusto Franklin Mendiburu Rojas

FICHA DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS

TEMA DE TESIS: "DERECHO DE DEFENSA Y LA VIGENCIA DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL EN LA DEFENSORÍA  
PÚBLICA DEL DISTRITO JUDICIAL DE PIURA 2019"


Indicadores	Criterios	Deficiente 0 – 20				Regular 21 – 40				Buena 41 – 60				Muy Buena 61 – 80				Excelente 81 – 100				OBSERVAC.
ASPECTOS DE VALIDACION		0	5	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
1.Claridad	Esta formulado con un lenguaje apropiado																			X		NINGUNA
2.Objetividad	Esta expresado en conductas observables																				X	NINGUNA
3.Actualidad	Adecuado al enfoque teórico abordado en la investigación																			X		NINGUNA
4.Organización	Existe una organización lógica entre sus ítems																				X	NINGUNA
5.Suficiencia	Comprende los aspectos necesarios en cantidad y calidad.																			X		NINGUNA

6. Intencionalidad	Adecuado para valorar las dimensiones del tema de la investigación																				X		NINGUNA
7. Consistencia	Basado en aspectos teóricos-científicos de la investigación																				X		NINGUNA
8. Coherencia	Tiene relación entre las variables e indicadores																				X		NINGUNA
9. Metodología	La estrategia responde a la elaboración de la investigación																			X			NINGUNA

INSTRUCCIONES: Este instrumento, sirve para que el EXPERTO EVALUADOR evalúe la pertinencia, eficacia del Instrumento que se está validando. Deberá colocar la puntuación que considere pertinente a los diferentes enunciados.

Piura, 5 de noviembre del 2019.

Nombre y Apellidos Dr. GILBERO CARRIÓN BARCO  
DNI 16720146  
Teléfono 977 859 287  
E-mail: ccarrionba@ucvvirtual.edu.pe

  
FIRMA

### CONSTANCIA DE VALIDACION

Yo, **GILBERTO CARRIÓN BARCO**; con DNI N° 16733848; profesión docente universitario; Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad; desempeñándome actualmente como Docente Universitario; en la Universidad César Vallejo filial Piura; por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de validación los Instrumentos los cuales se aplicaran en el proceso de la Investigación.

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones.

INTRUMENTOS	DEFICIENTE	ACEPTABLE	BUENO	MUY BUENO	EXCELENTE
1. Claridad					X
2. Objetividad					X
3. Actualidad				X	
4. Organización					X
5. Suficiencia				X	
6. Intencionalidad					X
7. Consistencia					X
8. Coherencia					X
9. Metodología				X	

En señal de conformidad firmo la presente en la ciudad de Piura 05 de noviembre del 2019.

Apellidos y Nombres : Dr. Gilberto Carrión Barco  
 DNI : 16720146  
 Especialidad : Doctora en Gestión Pública  
 E-mail : ccarrionba@ucvvirtual.edu.pe



Dr. Gilberto Carrión Barco